

HONORABLE
JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
-REPARTO-

ASUNTO: DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA.

Luis Felipe Munarth Rubio, mayor de edad, con domicilio en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía N° 79.883.129 de Bogotá, Abogado en ejercicio, con Tarjeta Profesional N° 140.708 del C.S.J., del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en nombre y representación de la señora **JEQUELINE FRANCO PEÑA** identificado (a) con **C.C. 41.759.985**, mediante el presente escrito, conforme al poder especialmente otorgado y que anexo, presento **DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA** contra la **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS** representado legalmente por el **Dr. JUAN MANUEL TRUJILLO SANCHEZ** y contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES** representada legalmente por su presidente el **Dr. JUAN MIGUEL VILLA LORA**, o por quien haga sus veces al momento de surtirse la notificación, vinculando a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado al presente proceso, en atención a lo dispuesto por el numeral 6 del Art. 610 del Código General del Proceso.

1. NOMBRE DE LAS PARTES (NUMERAL 2, ARTÍCULO 25 DEL CPT Y SS):

PARTE DEMANDANTE:

JEQUELINE FRANCO PEÑA identificada con **C.C. 41.759.985**

PARTE DEMANDADA:

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS Representado Legalmente por el señor **JUAN MANUEL TRUJILLO SANCHEZ**, o por quien haga sus veces al momento de surtirse la notificación.

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, representado legalmente por su presidente la **Dra. ADRIANA GUZMÁN RODRÍGUEZ** o por quien haga sus veces al momento de surtirse la notificación.

2. DOMICILIO Y/O DIRECCIÓN DE LAS PARTES (NUMERAL 3, ARTÍCULO 25 DEL CPT Y SS):

PARTE DEMANDANTE:

Carrera 38c # 2 f -16 en Bogotá, Cel. 323 2934308 E-mail: Jeauqueline.franco1621@gmail.com

PARTE DEMANDADA:

- A la **AFP COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS.**, en la calle 67 No. 7 – 94 Tel. 748 4848 E-mail: procesosjudiciales@colfondos.com.co
- A la Administradora Colombina de Pensiones, **COLPENSIONES** en la Carrera 15 N° 94 – 61. Teléfono: 217 01 00. E-mail: notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co

3. DOMICILIO Y/O DIRECCIÓN DEL APODERADO DEL DEMANDANTE (NUMERAL 4, ARTÍCULO 25 DE CPT Y SS):

APODERADO DEL ACTOR:

En la **Av. Calle 24 (ESPERANZA) # 95A-80. EDIFICIO COLFECAR BUSSINES CENTER DORADO (ETAPA 2 - OFICINA 302) Teléfono: 7552116. Celulares: 300 - 298 07 44, 300 - 348 57 71, 300 - 280 62 51. Correo Electrónico: oficinamunarth@icloud.com**

4. CLASE DE PROCESO (NUMERAL 5, ARTÍCULO 25 DEL CPT Y SS):

Por la naturaleza de la acción y la cuantía de las pretensiones, se trata de un **PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA**.

5. PRETENSIONES (NUMERAL 6 ARTÍCULO 25 DEL CPT Y SS):

5.1 DECLARATIVAS PRINCIPALES

5.1.1 Que se declare que existió omisión al deber de información a cargo de **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS**, en la afiliación de la señora **JEAQUELINE FRANCO PEÑA**.

5.1.2 Que se declare que **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS**, no brindó una información, clara, suficiente, oportuna sobre las consecuencias del traslado a mi poderdante.

5.1.3 Que se declare como consecuencia la ineficacia del formulario de afiliación suscrito por la señora **JEAQUELINE FRANCO PEÑA**, mediante el cual se afilió al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS**.

5.1.4 Que se declare que, para efectos pensionales, que continúe afiliada la señora **JEAQUELINE FRANCO PEÑA**, en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por **COLPENSIONES**, al que pertenecía antes.

5.1.5 Que se declare que, para efectos pensionales, el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por la **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS**, en este caso, realice la devolución de los aportes al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por **COLPENSIONES**, al que pertenecía antes.

5.2. CONDENATORIAS PRINCIPALES

5.2.1 Condenar a la **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS** y se obligue a efectuar la ineficacia en el formulario de afiliación suscrito por la señora **JEAQUELINE FRANCO PEÑA**, mediante el cual se afilió al **Régimen de Ahorro Individual** con el fondo privado.

5.2.2 En consecuencia, se condene que para efectos pensionales continúe afiliada la señora **JEAQUELINE FRANCO PEÑA**, en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por **COLPENSIONES**, al que pertenecía antes.

5.2.3 Condenar a la demandada sobre los demás derechos que resulten probados conforme a las facultades *ultra y extra petita*.

5.2.4 Condenar a la demandada al pago de las costas y agencias en derecho que se causen con ocasión de este proceso.

6. HECHOS Y/O OMISIONES (NUMERAL 7, ARTÍCULO 25 DEL CPT Y SS):

PRIMERO: La demandante **JEAQUELINE FRANCO PEÑA**, nació el 25 de abril de 1959 y actualmente cuenta con 64 años de edad.

SEGUNDO: Que la señora **JEAQUELINE FRANCO PEÑA**, empezó a cotizar en el régimen de prima media con solidaridad (RPM), hoy administrado por **COLPENSIONES** desde el **25 de noviembre de 1991**, hasta el **05 de marzo de 1993** como lo indica la **HISTORIA LABORAL** emitida por **COLPENSIONES**.

TERCERO: A finales del año 1999, la señora **JEAQUELINE FRANCO PEÑA**, se encontraba en su lugar de trabajo en la empresa **UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA** con **Nit. 860.022.382** cuando fue visitada por los promotores de ventas de la **AFP COLFONDOS S.A.**

CUARTO: Que la afiliación de la demandante al fondo demandado, la procuró el promotor de ventas del Fondo de Pensiones Obligatorias administrado por **COLFONDOS S.A.**, quien no suministro información suficiente, objetiva y clara al momento de realizar la afiliación.

QUINTO: Que la señora **JEAQUELINE FRANCO PEÑA** suscribió afiliación con **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS** mediante formulario de afiliación con fecha del **02 de diciembre del año 1999**, formulario que se anexa en la documental de pruebas para sustentar su veracidad.

SEXTO: Que, de acuerdo a lo anterior, la señora **JEAQUELINE FRANCO PEÑA** firmo un formulario fraudulento en donde se puede evidenciar que en el acapacite del tipo de vinculacion, se marco el cuadro de "vinculacion inicial", cuando claramente es traslado de regimen. Seguidamente en el acapacite de si mi poderdante habia cotizado mas de 150 semanas al ISS, esta sin diligenciar.

SEPTIMO: Que para efectos el promotor de ventas de la **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS**, le informa a la demandante **JEAQUELINE FRANCO PEÑA** que el **SEGURO SOCIAL ISS**, hoy **COLPENSIONES**, se acabaría y su pensión se iba a perder junto con lo cotizado hasta ese entonces, causándole incertidumbre y zozobra, para de este modo efectuar la afiliación de mi poderdante al fondo privado

OCTAVO: Que para efectos el promotor de ventas del fondo de pensiones la **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS**, estaba en el deber legal de suministrar información clara, veraz y oportuna al trabajador, esto es, que antes de la supuesta afiliación o traslado de régimen pensional, la demandada debió advertirle el riesgo y las consecuencias negativas que le generaría tal traslado o, en su defecto, no tramitar la afiliación ante la omisión de brindar tan trascendental información de los pro y los contras del traslado.

NOVENO: Que en lo que concierne con la vinculación de la actora al fondo demandado, que aparejó para este un cambio de régimen pensional, esa entidad del sistema de seguridad social ISS hoy **COLPENSIONES** no desplegó ningún asesoramiento e información al trabajador, que le permitiera a ella valorar las consecuencias de su traslado del régimen pensional de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad.

DECIMO: Que para efectos se manifiesta que está configurada el error en la naturaleza del acto, generado por la negligencia de la demandada en la tarea de afiliación, dando como resultado un traslado de régimen pensional no anhelado por el trabajador

DECIMO PRIMERO: Es importante mencionar que el fondo de pensiones **COLFONDOS S.A.** al ser el fondo actual de pensiones de mi poderdante le proyecta que el saldo total en la cuenta es insuficiente para pension.

DECIMO SEGUNDO: En base a lo anterior se entiende que **COLPENSIONES** le proyecta a mi poderdante un monto de **(\$3.767.241.00)** a los **57** años de edad, mostrándose más favorable para

las aspiraciones pensionales de mi poderdante, Como lo muestran las proyecciones de uno y otro fondo de pensiones aportadas junto con este escrito

DECIMO TERCERO: De igual manera se presentó Derecho de Petición ante la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES**, el día 10 de abril de 2023, solicitando se declare la ineficacia del traslado al fondo de pensiones **COLFONDOS S.A.**,

DECIMO CUARTO: Así las cosas, el día 13 de abril de 2023, la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES**, emite respuesta indicando que no es procedente anular la afiliación.

DECIMO QUINTO: Igualmente, se radico ante la **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS**, solicitud de ineficacia del traslado el día 19 de abril de 2023.

DECIMO SEXTO: De acuerdo al hecho anterior, el día 04 de mayo de 2023, **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS**, allega respuesta indicando que no es procedente anular la afiliación sin una orden judicial.

Que el demandante la señora **JEAUQUELINE FRANCO PEÑA** está sufriendo un perjuicio irremediable al no aparecer en la historia laboral por la ineficacia del traslado de régimen realizado a cargo de la **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS** para poder así acceder a una pensión digna y vital.

7. FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO (NUMERAL 8, ARTÍCULO 25 DEL CPT Y SS) MARCO LEGAL:

7.1 FUNDAMENTOS DE DERECHO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

ART. 2. *“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.”*

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

ART. 25. *“El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.”*

ART. 13. *“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.”*

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”.

ART. 48. *“La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.”*

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social”.

ART. 53. *“Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:*

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad”.

ART. 58. “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social”.

ART. 335. “Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito”.

CÓDIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO

ART. 127. Elementos integrantes. Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.

DEBER DE LA AFP. COLFONDOS S.A.

“Cumplir con el deber del buen consejo, proporcionando a los afiliados información completa sobre las alternativas de su afiliación al esquema de Multifondos, así como los beneficios, inconvenientes y efectos de la toma de decisiones en relación con su participación en cualquiera de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones.”

LEY 100 DE 1993

ART. 11. CAMPO DE APLICACIÓN. el sistema general de pensiones consagrado en la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando y respetando, adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial en todos los órdenes del régimen de prima media y del sector privado en general.

lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia que le asiste a las partes y que el tribunal de arbitramento dirima las diferencias entre las partes.

ART. 288. APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE LEY Y EN LEYES ANTERIORES. Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley.

LEY 57 DE 1887 (CÓDIGO CIVIL)

ART. 1603. EJECUCION DE BUENA FE. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella.

CAPÍTULO VII. SILENCIO ADMINISTRATIVO – DEL (C.P.A.C.A.)

ART. 83. SILENCIO NEGATIVO. *Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.*

En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la petición sin que esta se hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión.

La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades. Tampoco las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso 7ª01455623, Administrativo se haya notificado auto admisorio de la demanda”

DECRETO 656 DE 1994

ART. 4. *En su calidad de administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad, las administradoras son instituciones de carácter previsional y, como tales, se encuentran obligadas a prestar en forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a dicha calidad. Por lo tanto, serán responsables de los perjuicios que por su culpa leve se puedan ocasionar a los afiliados.*

DECRETO 692 DE 1994

ARTÍCULO 11. DILIGENCIAMIENTO DE LA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN. *La selección del régimen implica la aceptación de las condiciones propias de éste, para acceder a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y demás prestaciones económicas a que haya lugar.*

La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos en los artículos anteriores es libre y voluntaria por parte del afiliado. Tratándose de trabajadores con vinculación contractual, legal o reglamentaria, la selección efectuada deberá ser informada por escrito al empleador al momento de la vinculación o cuando se traslade de régimen o de administradora, con el objeto de que éste efectúe las cotizaciones a que haya lugar.

DECRETO 720 DE 1994

ART. 10. RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES. *Cualquier infracción, error u omisión —en especial aquellos que impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados— en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad compromete la responsabilidad de la sociedad administradora respecto de la cual adelante sus labores de promoción o con la cual, con ocasión de su gestión, se hubiere realizado la respectiva vinculación, sin perjuicio de la responsabilidad de los promotores frente a la correspondiente sociedad administradora del sistema general de pensiones.*

Los costos que generen los convenios que celebren las sociedades administradoras del sistema general de pensiones con los promotores no podrán trasladarse, directa o indirectamente, a los afiliados.

ART. 12. OBLIGACIONES DE LOS PROMOTORES. *Los promotores que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones deberán suministrar suficiente, amplia y oportuna información a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante toda la vinculación y con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.*

Igualmente, respetarán la libertad de contratación de seguros de renta vitalicia por parte del afiliado, según las disposiciones pertinentes.

7.2 RAZONES DE DERECHO.
JURISPRUDENCIA

DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C. TRIBUNAL SUPERIOR (Sala Laboral)
RELEVANTE

M. PONENTE: MARTHA RUTH OSPINA GAITÁN

FECHA: 21/01/2014

CLASE DE PROCESO: ORDINARIO LABORAL

NÚMERO DE RADICADO: 110013105 011 2012 00108 01

PARTES: GRACIELA PEÑA ALFONSO VS COLPENSIONES

DECISIÓN: REVOCAR SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y DECLARA LA NULIDAD DEL TRASLADO

ASUNTO Nulidad Afiliación **PROBLEMA JURÍDICO:** Resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado de la demandante en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá el 18 de noviembre de 2013

ASPECTOS RELEVANTES

Antecedentes:

“La demandante solicita declarar la nulidad del traslado y de la afiliación a pensión a la A.F.P. Colfondos, en consecuencia esa entidad debe trasladar todos los aportes junto con sus rendimientos al Seguro Social, que puede solicitar el reconocimiento de la pensión al I.S.S., lo que resulte probado ultra y extra petita y costas del proceso.”

Fallo de primera instancia:

“El Juzgado 11 Laboral del Circuito de esta ciudad, mediante sentencia de 18 de noviembre de 2013, absolvió a las demandadas de todas y cada una de las súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte actora.

Su decisión la fundó en que la actora ingresó al sistema de seguridad social a partir del 1º de febrero de 1987 laborando al servicio del Municipio de Guasca y efectuando cotizaciones a la Caja Nacional de Previsión Social, que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 la actora contaba con poco más de 36 años, por lo que en los términos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 era beneficiaria del régimen de transición en virtud de su edad.

Que revisada la documental allegada, era claro que la accionante se afilió a Colfondos a partir del 19 de octubre de 1994, por lo que de entrada e indiscutiblemente perdió el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Que por regla general las declaraciones de la voluntad obligan a las partes, por lo que si pretendió la declaratoria de la nulidad ante la configuración de un vicio del consentimiento, era carga de la demandante probar los hechos estructurales.

Que conforme con las pruebas recaudadas en el proceso, no se probó que se hubiera viciado su consentimiento por error, que la actora tuvo la oportunidad de hacerle las preguntas a la asesora para que le aclarara las dudas, que si bien las 2 primeras testigos manifiestan que la asesora les indicó que podían pensionarse a cualquier edad y con mayores rendimientos, lo que según la actora fue determinante para afiliarse a Colfondos, esos aspectos no generan un engaño tal, con fuerza generadora de nulidad, pues los principios rectores del RAIS si permiten obtener la pensión a cualquier edad.

Que al momento en que la actora solicitó la afiliación al RAIS el derecho a la pensión de continuar en el régimen de prima media era una mera expectativa, toda vez que contaba con 37 años de edad y su derecho pensional estaba lejos de cristalizarse.

Que dada su participación incipiente en aportes al sistema de seguridad social integral, no era posible hacer una comparación entre uno y otro régimen.

Problema Jurídico a resolver:

Para resolver los interrogantes, precisa la Sala que la sentencia apelada se revocará, teniendo en cuenta los razonamientos que a continuación se consignan.

Resolución al problema jurídico:

*“De antemano anuncia la Sala que la sentencia apelada se **revocará**.”*

RESUELVE

Primero: Revocar la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2013 por el Juzgado 11 Laboral del

Circuito de Bogotá, para en su lugar **Declarar la nulidad de la afiliación de la señora Graciela Peña Alfonso realizada el 19 de octubre de 1994 a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, acorde con lo considerado.**

Segundo: Ordenar a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., que proceda a trasladar a Colpensiones la totalidad de lo ahorrado por la demandante Graciela Peña Alfonso en su cuenta de ahorro individual, junto con sus rendimientos.

Tercero: Ordenar a Colpensiones que proceda a recibir por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. la totalidad de lo ahorrado por la demandante Graciela Peña Alfonso en su cuenta de ahorro individual, junto con sus rendimientos.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (Sala de Casación Laboral de la Seguridad Social)

RELEVANTE

M. PONENTE: ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN

FECHA: 09/09/ 2008

CLASE DE PROCESO: RECURSO DE CASACIÓN

NÚMERO DE RADICADO: 31314

PARTES: JOSÉ MARDOQUEO JIMÉNEZ ROMERO VS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. Y A LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, CAJANAL

DECISIÓN: REVOCAR SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y DECLARA LA NULIDAD DEL TRASLADO

ASUNTO Nulidad Afiliación **PROBLEMA JURÍDICO:** Nulidad del traslado de régimen pensional - engaño por las administradoras de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad. Dichas entidades deben suministrar a sus interesados información completa y comprensible dando a conocer sus beneficios e inconvenientes. Régimen de prima media con prestación definida - Cambio de régimen al de ahorro individual cuando tenía 62 años de edad y era beneficiario del régimen de transición.

“Las administradoras de pensiones hacen parte, como elemento estructural, del sistema; mediante ellas el Estado provee el servicio público de pensiones; tienen fundamento constitucional en el artículo 48 de la Carta Política, que autoriza su existencia, -desarrollado por los artículos 90 y s.s. de la Ley 100 de 1993 - cuando le atribuye al Estado la responsabilidad por la prestación del servicio público, “la dirección, coordinación y control” de la Seguridad Social, y autoriza su prestación a través de particulares.

Ciertamente las administradoras de pensiones son en esencia fiduciarias del servicio público de pensiones, razón por la cual su comportamiento y determinaciones deben estar orientadas no sólo a alcanzar sus propias metas de crecimiento y beneficio, sino a satisfacer de la mejor manera el interés colectivo que se realiza en cada persona que queda desprotegida por haberse cernido sobre sí una enfermedad o trauma que lo deja inválido, o la muerte sobre el miembro de la familia del cual depende, o sobre su afiliado cuando le llega el momento de su retiro de la vida productiva por imposición o disfrute de la vejez.

Las administradoras de pensiones lo son de un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, según lo prescribe el artículo 97 de la Ley 100 de 1993; la ley radica en ellas el deber de gestión de los intereses de quienes se vinculen a ellas, y cuyos deberes surgen desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de su afiliación a la administradora.

Es razón de existencia de las Administradoras la necesidad del sistema de actuar mediante instituciones especializadas e idóneas, con conocimientos y experiencia, que resulten confiables a los ciudadanos quienes les van a entregar sus ahorros y sus seguros de previsión para su vejez, su invalidez o para su familia cercana en caso de muerte prematura.

Esas particularidades ubican a las Administradoras en el campo de la responsabilidad profesional, obligadas a prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de instituciones de

carácter previsional, la misma que, por ejercerse en un campo que la Constitución Política estima que concierne a los intereses públicos, tanto desde la perspectiva del artículo 48 como del artículo 335, se ha de estimar con una vara de rigor superior a la que se utiliza frente a las obligaciones entre particulares.

Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de carácter profesional, la que le impone el deber de cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente le señalan las normas, en especial las de los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia y pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del C.C., regla válida para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o contractual.

La doctrina ha bien elaborado un conjunto de obligaciones especiales, con específica vigencia para todas aquellas entidades cuya esencia es la gestión fiduciaria, como la de las administradoras de pensiones, que emanan de la buena fe,

como el de la transparencia, vigilancia, y el deber de información.

La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.

Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad.

Bajo estos parámetros es evidente que el engaño que protesta el actor tiene su fuente en la falta al deber de información en que incurrió la administradora; en asunto neurálgico, como era el cambio de régimen de pensiones, de quien ya había alcanzado el derecho a una pensión en el sistema de prima media, su obligación era la de anteponer a su interés propio de ganar un afiliado, la clara inconveniencia de postergar el derecho por más de cinco años, bajo la advertencia de que el provecho de la pensión a los sesenta años, era solo a costa de disminuir el valor del bono pensional, castigado por su venta anticipada a la fecha de redención.

En estas condiciones el engaño, no solo se produce en lo que se afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de decisión que se persigue; de esta manera la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad demandada.

No desdice la anterior conclusión, lo asentado en la solicitud de vinculación a la Administradora de Pensiones que aparece firmada por el demandante, que su traslado al régimen de ahorro individual se dio de manera voluntaria, que "se realizó de forma libre, espontánea y sin presiones", pues lo que se echa de menos es la falta de información veraz y suficiente, de que esa decisión no tiene tal carácter si se adopta sin el pleno conocimiento de lo que ella entraña.

Se ha de señalar que la actuación viciada de traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual, no se convalida por los traslados de administradoras dentro de este último régimen; ciertamente, la decisión de escoger entre una y otra administradora de ahorro individual, no implica la ratificación de la decisión de cambio de régimen que conlleva modificar sensiblemente el contenido de los derechos prestacionales."

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. (Sala de Casación Laboral)

TEMA – EN CUANTO AL CARÁCTER PROFESIONAL DE LAS AFP's Y DEBER DE INFORMACIÓN.

• SENTENCIA 31989 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008, PONENTE: EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS:

"(...) responsabilidad de las administradoras de pensiones es de carácter profesional, la que le impone el deber de cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente le señalan las normas, en especial las de los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia y pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del C.C., regla válida para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o contractual.

La doctrina ha bien elaborado un conjunto de obligaciones especiales, con específica vigencia para todas aquellas entidades cuya esencia es la gestión fiduciaria, como la de las administradoras de pensiones, que emanan de la buena fe, como el de la transparencia, vigilancia, y el deber de información.

La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.

Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad."

• SENTENCIA 31314 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008, PONENTE: ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN:

"Las administradoras de pensiones hacen parte, como elemento estructural, del sistema; mediante ellas el Estado provee el servicio público de pensiones; tienen fundamento constitucional en el artículo 48 de

la Carta Política, que autoriza su existencia, -desarrollado por los artículos 90 y s.s. de la Ley 100 de 1993 - cuando le atribuye al Estado la responsabilidad por la prestación del servicio público, "la dirección, coordinación y control" de la Seguridad Social, y autoriza su prestación a través de particulares.

Ciertamente las administradoras de pensiones son en esencia fiduciarias del servicio público de pensiones, razón por la cual su comportamiento y determinaciones deben estar orientadas no sólo a alcanzar sus propias metas de crecimiento y beneficio, sino a satisfacer de la mejor manera el interés colectivo que se realiza en cada persona que queda desprotegida por haberse cernido sobre sí una enfermedad o trauma que lo deja inválido, o la muerte sobre el miembro de la familia del cual depende, o sobre su afiliado cuando le llega el momento de su retiro de la vida productiva por imposición o disfrute de la vejez.

Las administradoras de pensiones lo son de un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, según lo prescribe el artículo 97 de la Ley 100 de 1993; la ley radica en ellas el deber de gestión de los intereses de quienes se vinculen a ellas, y cuyos deberes surgen desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de su afiliación a la administradora.

Es razón de existencia de las Administradoras la necesidad del sistema de actuar mediante instituciones especializadas e idóneas, con conocimientos y experiencia, que resulten confiables a los ciudadanos quienes les van a entregar sus ahorros y sus seguros de previsión para su vejez, su invalidez o para su familia cercana en caso de muerte prematura.

Esas particularidades ubican a las Administradoras en el campo de la responsabilidad profesional, obligadas a prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, la misma que, por ejercerse en un campo que la Constitución Política estima que concierne a los intereses públicos, tanto desde la perspectiva del artículo 48 como del artículo 335, se ha de estimar con una vara de rigor superior a la que se utiliza frente a las obligaciones entre particulares.

En estas condiciones el engaño, no solo se produce en lo que se afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de decisión que se persigue; de esta manera la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad demandada.

Se ha de señalar que la actuación viciada de traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual, no se convalida por los traslados de administradoras dentro de este último régimen; ciertamente, la decisión de escoger entre una y otra administradora de ahorro individual, no implica la ratificación de la decisión de cambio de régimen que conlleva modificar sensiblemente el contenido de los derechos prestacionales."

• **SENTENCIA 33083 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2011, PONENTE: ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN.**

"Aquí falta la administradora a su deber de proporcionar una información completa, pues se incumple de manera grave si se plantea el valor de una eventual pensión a los sesenta años, sin advertir, que se trataba de una persona que ya tenía el derecho causado a los 55 años de edad, y que de todas maneras la posibilidad de tener una pensión en el fondo privado a los 60 años debía ser descartada de entrada para quien como el actor, en su posición de potencial vinculado al Régimen de Ahorro Individual, su capital para gozar la pensión, era el de un bono pensional causado por sus servicios y cotizaciones por veinte o más años de trabajo, redimible a los sesenta y dos años, y el cual era el capital principalísimo, frente al que podía acumular mediante cotizaciones y rendimientos en los tres años que le faltaban para llegar a esa edad.

En la oferta se le hizo al actor una comparación pura y simple entre una pensión de prima media y una de ahorro individual, sin advertir que el mayor valor pensional que ofrecía Porvenir era bajo la modalidad del retiro programado con un monto posible y que en ningún caso sería definitivo, pues quedaba sujeto a los rendimientos del capital que podían disminuir su valor si las tasas de interés del mercado fueran inferiores a lo esperado llegando incluso a ser temporal, todo esto, frente a un derecho en el régimen de prima media que ya estaba causado, era cierto y de valor vitalicio constante.

Resulta aquí trascendente la información que fue parcial para la decisión que llevó al actor a optar por cambio de régimen, y que posteriormente se advierte equivocada, cuando al reclamar su derecho a la edad de los sesenta años, el camino que le ofrecen es el del retiro programado, con la venta de los bonos pensionales en el mercado secundario, con enorme sacrificio económico, circunstancia que no se le hizo saber por parte de la administradora siendo éste su deber."

TEMA – A QUIEN CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA, PARA DEMOSTRAR

LA ASESORÍA O NO AL MOMENTO DE EFECTUAR LA AFILIACIÓN.

- **SENTENCIA SL 17595 DEL 2017 NO. RADICADO 46292 DEL 17 DE OCTUBRE, PONENTE: FERNANDO CASTILLO CADENA.**

Esta Sentencia también precisa, que las AFP's tienen el deber del buen consejo y les corresponden a ellas brindar las diferentes alternativas de las ventajas y desventajas, hasta el punto de desanimara al interesado de tomar una decisión si realmente lo perjudica.

TEMA – LA NULIDAD DE TRASLADO NO SOLO OPERA PARA PERSONAS COBIJADAS CON EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.

- **SENTENCIA SL 782 DEL 2018 NO. RADICADO 58158 DEL 14 DE MARZO DE 2018.**

“La discusión frente a la validez del traslado se suscita cuando esta en discusión la pérdida del régimen de transición en los eventos de multivinculación o cuando quieran que se discutan los vicios del consentimiento por información errónea o incompleta frente al afiliado.”

- **SENTENCIA SL 11385 DEL 2017 No. RADICADO 41646 DEL 18 DE JULIO DE 2017, PONENTE: FERNANDO CASTILLO CADENA.**

“(…) no resulta ortodoxo considerar como erradamente lo hizo esta corporación, que siempre que se solicita la nulidad del traslado, tenga como fin último la de recuperar o mantener el reseñado régimen de transición.

(…)

de esta manera es claro que la aspiración de la parte demandante, no estaba encaminada que una vez declarada la nulidad en la afiliación o traslado al régimen de ahorro individual, npudiese entenderse beneficiaria del régimen de transición.

- **SENTENCIA SL 1947 DE No. RADICADO 47125 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PONENTE: GERMAN BOTERO ZULUAGA.**

“ese mismo compendio normativo en su precepto 98, indica que al ser entre otras las AFP's entidades que desarrollan actividades de interés público deben emplear debida diligencia en la prestación de los servicios, y que en la celebración de las operaciones propias de su objeto, dichas instituciones deberan abstenerse de convenir cláusulas que por su carácter exorbitante, puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso en su posición dominante, es decir, no se traslada únicamente de completar un formato ni adherirse a una cláusula genérica sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes, para advertir la trascendencia de la decisión adoptada tanto en el cambio al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición.”

SALA DE CASACIÓN LABORAL

ID: 662987

M. PONENTE: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

NÚMERO DE PROCESO: 68852

NÚMERO DE PROVIDENCIA: SL1452-2019

PROCEDENCIA: Tribunal Superior Sala de Descongestión Laboral de Medellín

CLASE DE ACTUACIÓN: RECURSO DE CASACIÓN

TIPO DE PROVIDENCIA: SENTENCIA FECHA: 03/04/2019

DECISIÓN: CASA TOTALMENTE ACTA n.º: 12

FUENTE FORMAL: Ley 100 de 1993 art. 13, 271 y 272 / Ley 797 de 2003 art. 23 / Decreto 663 de 1993 núm. 1 / Ley 1328 de 2009 art. 3 lit. c / Decreto 2241 de 2010 / Ley 1748 de 2014 / Decreto 2071 de 2015 art. 3

ASUNTO: Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, revoque la decisión del a quo y se reconozca la pensión de vejez en los términos establecidos en el acuerdo 049 de 1990 al considerar nulo su traslado del régimen de prima media

con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad.

PROBLEMA JURÍDICO: La Corte analizará (1) la obligación relativa al deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, y (2) si para dar por satisfecho ese deber, es suficiente con diligenciar el formato de afiliación. Así mismo, (3) determinará quién tiene la carga de la prueba en estos eventos, y (4) si la ineficacia de la afiliación solo tiene cabida cuando el afiliado tiene una expectativa de pensión o un derecho causado.

TEMA: PENSIONES» ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES» OBLIGACIONES - En lo relacionado con traslados entre regímenes las entidades administradoras de pensiones tienen el deber ineludible de suministrar información respecto de todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional e ilustrar y dar a conocer de manera cierta, oportuna y transparente las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica -deber de información, asesoría y buen consejo, doble asesoría.

...“ la obligación de las entidades de “suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado”.

...” No se trataba por tanto de una carrera de los promotores de las AFP por capturar a los ciudadanos incautos mediante habilidades y destrezas en el ofrecimiento de los servicios, sin importar las repercusiones colectivas que ello pudiese traer en el futuro...escoger las mejores opciones del mercado”...

... “implica un parangón entre las características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los regímenes vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado. Por su parte, la transparencia es una norma de diálogo que le impone a la administradora, a través del promotor de servicios o asesor comercial, dar a conocer al usuario, en un lenguaje claro, simple y comprensible, los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios. En otros términos, la transparencia impone la obligación de dar a conocer toda la verdad objetiva de los regímenes, evitando sobredimensionar lo bueno, callar sobre lo malo y parcializar lo neutro”...

...”desde su fundación, las administradoras ya se encontraban obligadas a brindar información objetiva, comparada y transparente a los usuarios sobre las características de los dos regímenes pensionales, pues solo así era posible adquirir “un juicio claro y objetivo” de “las mejores opciones del mercado”. En concordancia con lo expuesto, desde hace más de 10 años, la jurisprudencia del trabajo ha considerado que dada la doble calidad de las AFP de sociedades de servicios financieros y entidades de la seguridad social, el cumplimiento de este deber es mucho más riguroso que el que podía exigirse a otra entidad financiera, pues de su ejercicio dependen caros intereses sociales, como son la protección de la vejez, de la invalidez y de la muerte. ...

...”Las administradoras del Sistema General de Pensiones deberán emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos y/o en la prestación de sus servicios a los consumidores financieros, a fin de que éstos reciban la información y/o la atención debida y respetuosa en relación con las opciones de afiliación a cualquiera de los dos regímenes que conforman el Sistema General de Pensiones, así como respecto de los beneficios y riesgos pensionales de la decisión. En el caso del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, deberán poner de presente los tipos de fondos de pensiones obligatorias que pueden elegir según su edad y perfil de riesgo, con el fin de permitir que el consumidor financiero pueda tomar decisiones informadas. Este principio aplica durante toda la relación contractual o legal, según sea el caso.

...”Transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Las administradoras del Sistema General de Pensiones deberán suministrar al público información cierta, suficiente, clara y oportuna

que permita a los consumidores financieros conocer adecuadamente los derechos, obligaciones y costos que aplican en los dos regímenes del Sistema General de Pensiones”...

...“La asesoría de que trata el inciso anterior deberá contemplar como mínimo la siguiente información conforme a la competencia de cada administradora del Sistema General de Pensiones:

1. Probabilidad de pensionarse en cada régimen.

2. Proyección del valor de la indemnización sustitutiva o devolución de saldos, lo anterior frente a la posibilidad de no cumplir los requisitos de ley para acceder a la pensión de vejez a la edad prevista en la normatividad vigente.

3. Proyección del valor de la pensión en cada régimen.

4. Requisitos para acceder a la garantía de pensión mínima en cada régimen.

5. Información sobre otros mecanismos de protección a la vejez vigentes dentro de la legislación.

6. Las demás que la Superintendencia Financiera de Colombia establezca.”...

...“2. El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente - Necesidad de un consentimiento informado” ...

...“Para el Tribunal basta la suscripción del formulario de afiliación, y además, que el documento no sea tachado de falso, para darle plena validez al traslado.

La Sala considera desacertada esta tesis, en la medida que la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como “la afiliación se hace libre y voluntaria”, “se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones” u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado...”

...“sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo. Esto, desde luego, teniendo en cuenta las particularidades de cada asunto.”...

NOTA DE RELATORÍA: Esta providencia es relevante en: **TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL > INEFICACIA** - Una inoportuna o insuficiente asesoría sobre los efectos del traslado es indicativa de que la decisión no estuvo precedida de información suficiente, y menos de real consentimiento - la información suficiente comprende no solo los beneficios del régimen al que se pretende el traslado, sino el proyecto del monto de la pensión en cada régimen- / **ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES > OBLIGACIONES** - Deber de informar sobre las consecuencias del traslado de régimen por parte de las administradoras de pensiones -reseña normativa- / **PRINCIPIO DE LA CARGA DE LA PRUEBA > APLICACIÓN** - Si se discute que la administradora de pensiones omitió brindar información veraz y suficiente en referencia a la afiliación o traslado de régimen pensional, le corresponde a ésta demostrar que cumplió con el deber de asesoría e información, puesto que la afirmación que realiza el actor de no haberla recibido es un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarse el fondo de pensiones, invertir la carga de la prueba contra la parte débil de la relación contractual es un despropósito, cuando son las entidades financieras quienes por su profesionalismo tienen ventaja frente al afiliado inexperto.

Esta sentencia, precisa el deber y obligación a las que están sometidas las AFP'S desde su creación, para con el cliente, ya que es de vital importancia para su futuro pensional, y que puede acarrear una enorme pérdida monetaria si se llegara a tomar una decisión errónea, pérdida incluso en pensión, sustitución pensional o de invalidez.



RAZONAMIENTO DE LOS FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO.

La Ley 100 de 1993 conformó un nuevo sistema general de pensiones, administrado por dos regímenes pensionales el de prima media con prestación definida (RPM), el cual se estaba aplicando antes de esta norma, y el de ahorro individual con solidaridad (RAIS), el primero fue administrado por el seguro social, hoy COLPENSIONES y el segundo por las Administradoras de fondos de pensión AFP's, las cuales surgieron con la entrada en vigencia del Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI).

La vigencia de la Ley 100 de 1993, trajo consigo un despliegue considerable de las AFP's por captar la mayor cantidad de afiliados al RAIS, **situación que llevo a tomar decisiones erróneas al momento de consignar los formularios de afiliación, a estos fondos privados de pensiones;** conforme al artículo 4o. del Decreto 656 de 1994, las AFP's ostentan una calidad previsional, por esto están obligadas a prestar los servicios inherentes a esta calidad, donde se destaca el deber de brindar una debida información, deber que se reitera en el artículo 12 del Decreto 720 de 1994.

Se entiende que los formularios de afiliación a fondos de pensión, prestan las mismas calidades de un contrato, ya que ejercen fuerza vinculante entre los afiliados y las AFP's, por esto deben ser ejecutados de buena fe según nuestro Código Civil, consideración que es semejante a lo estipulado en el artículo 11 (Diligenciamiento de la Selección y Vinculación) a los regímenes de pensión, dado que la selección del régimen pensional se debe hacer voluntariamente, lo cual implica la aceptación de las condiciones propias del régimen pensional elegido.

Ahora bien, **si al adelantarse las diligencias tendientes a la afiliación a una AFP, el promotor de ventas de dicho fondo privado omite suministrar suficiente, amplia y oportuna información de las ventajas al posible afiliado, haciéndolo firmar un formulario de afiliación, en el evento de que esta afiliación perjudique al afiliado en sus intereses, esta afiliación se entendería nula,** ya que se encontraría viciada en el consentimiento del afiliado, porque si se le hubiese dado información suficiente, amplia y oportuna de los beneficios como también de los perjuicios, de seguro no hubiera efectuado la afiliación a la AFP y el consecuente traslado al RAIS.

Por otro lado, los precedentes jurisprudenciales descritos en este libelo, muestran situaciones similares al tema que nos ocupa, mostrándonos como en las afiliaciones y los consecuentes traslados de algunas personas al RAIS, los promotores de ventas al omitir el deber de asesoría, generaron perjuicios casi irremediables en los intereses de estas personas, debido a que el RAIS les es menos favorable que el RPM, en cuanto al monto de la mesada pensional ofrecido en uno y otro fondo, donde se resaltan aspectos importantes como el deber de asesoría, el vicio en el consentimiento del afiliado al momento de firma el formulario de afiliación, **resaltando normas como los Decretos 656, 692 y 720 del año 1994, los cuales se tenían que haber tenido en cuenta para efectuar la afiliación de estas personas a las AFP's demandas.**

Teniendo en cuenta lo anterior, considero que los fundamentos y razones de derecho descritos en este escrito, prestan suma importancia para resolver de fondo el caso que llevó a esta demanda, así como también se debe resaltar la Constitucionalidad del Derecho Laboral, al mencionar los artículos constitucionales citados en este libelo demanda torio, por existir una vulneración latente de los derechos de mi poderdante, por parte de **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS,** al no advertir a la señora **JEAQUELINE FRANCO PEÑA** de los efectos negativos que generaría la afiliación a este fondo privado, la cual derivo en su consecuente traslado de régimen pensional.

8. MEDIOS DE LA PRUEBA (NUMERAL 9, ARTÍCULO 25 DEL CPT Y SS):

8.1 DOCUMENTALES:

1. Copia de la cédula de ciudadanía de la señora **JEAQUELINE FRANCO PEÑA.**
2. **HISTORIA LABORAL** emitida por el **AFP COLFONDOS S.A.**
3. Proyección de la señora **JEAQUELINE FRANCO PEÑA** expedida por **COLFONDOS.**
4. **HISTORIA LABORAL** emitida por **COLPENSIONES.**
5. Proyección de la señora **JEAQUELINE FRANCO PEÑA** expedida por **COLPENSIONES**

6. Derecho de petición radicado ante **COLPENSIONES**, del 10 de abril del 2023.
7. Copia de la respuesta de **COLPENSIONES**, del 13 de abril de 2023.
8. Derecho de petición radicada ante la **AFP COLFONDOS S.A.**, del día 19 de abril de 2023.
9. Copia de la respuesta de la **AFP COLFONDOS S.A.**, del 04 de mayo de 2023.
10. Copia del acta o formulario de afiliación suscrito por la señora **JEAQUELINE FRANCO PEÑA**, mediante el cual se afilió al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad **COLFONDOS S.A.**

8.2 MEDIOS DE LA PRUEBA QUE SE SOLICITAN:

La presente solicitud se realiza a la demandada **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS** a fin de probar los hechos que son objeto de litigio, solicitando lo siguiente:

1. Copia del acta o formulario de afiliación suscrito por la señora **JEAQUELINE FRANCO PEÑA**, mediante el cual se afilió al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad **COLFONDOS S.A.**
2. Copia del expediente de la demandante que repose en los archivos de la demandada.

9. CUANTÍA Y COMPETENCIA (NUMERAL 10 Y 1, ARTÍCULO 25 DEL CPT Y SS):

El razonamiento de la cuantía no se puede deducir toda vez que la presente demanda versa sobre un negocio jurídico emanado de una controversia directa en derecho sustancial entre una persona natural y una entidad de carácter privado.

Es competencia de ese Organismo Judicial resolver todas las controversias que se presenten sobre el Sistema de Seguridad Social Integral, por la naturaleza de la acción, por razón del domicilio de la Entidad y el último sitio de trabajo del demandante.

10. DECLARACIÓN JURAMENTADA

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que no he presentado demanda o solicitudes de conciliación con base en los mismos hechos, en otro despacho judicial y que las direcciones de los correos electrónicos de los fondos de pensiones privados, se obtuvieron de acuerdo a los certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio y que se allegaron en los anexos de la demanda, canales digitales que fueron suministrados por ellos en los documentos antes mencionados.

11. COMPETENCIA TERRITORIAL


El lugar donde la señora **JEAQUELINE FRANCO PEÑA**, presta sus servicios profesionales fue en la ciudad de Bogotá.

12. ANEXOS (ARTÍCULO 26 DEL CPT Y SS):

- a) Poder debidamente conferido al Dr. Luis Felipe para presentar la Demanda.
- b) Copia de la Tarjeta Profesional del apoderado de la parte demandante.
- c) Copia de la Cédula de Ciudadanía del apoderado de la parte demandante.
- d) Copia del Artículo del Columnista Eduardo Sarmiento del periódico **EL ESPECTADOR**, publicado el día 17 de febrero de 2013.

- e) Certificado de Existencia y Representación Legal de **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS**
- f) Las Pruebas Documentales relacionadas en el acápite de pruebas.
- g) Envío de libelo, poder y anexos por correo electrónico enviado a las demandadas COLFONDOS S.A. Y COLPENSIONES, de acuerdo al Decreto 806 del 2020.

Atentamente,


Luis Felipe Munarth Rubio
C.C. N° 79.883.129 de Bogotá D.C.
T.P. N° 140.708 del C.S.J.



DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN Y RECONOCIMIENTO

NOTARIA SETENTAY TRES DEL CIRCULO DE BOGOTÁ

LA NOTARIA 73 DE BOGOTÁ HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO FUE PRESENTADO PERSONALMENTE POR MUNARTH RUBIO LUIS FELIPE, QUIEN EXHIBIO LA C.C.79.883.129. Y TARJETA No. 140.708C.S.J.Y DECLARÓ QUE LA FIRMA QUE APARECE EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES SUYA Y QUE EL CONTENIDO DEL MISMO ES CIERTO.

miércoles 24 de mayo de 2023



Salvador Albeiro Rodríguez